

No. 35940

**Ecuador
and
Germany**

Treaty between the Republic of Ecuador and the Federal Republic of Germany on the promotion and reciprocal protection of capital investments (with protocol). Quito, 21 March 1996

Entry into force: *12 February 1999 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article 12*

Authentic texts: *Spanish and German*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Ecuador, 1 August 1999*

**Équateur
et
Allemagne**

Traité entre la République de l'Équateur et la République fédérale d'Allemagne relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements du capital (avec protocole). Quito, 21 mars 1996

Entrée en vigueur : *12 février 1999 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article 12*

Textes authentiques : *espagnol et allemand*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Équateur, 1er août 1999*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

TRATADO ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA
LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE FOMENTO Y
RECIPROCA PROTECCION DE INVERSIONES DE CAPITAL

La República del Ecuador y la República Federal de Alemania:

Animadas del deseo de intensificar la colaboración económica entre ambos Estados;

Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones de capital de los nacionales o sociedades de uno de los dos Estados en el territorio del otro Estado;

Reconociendo que el fomento y la protección de esas inversiones de capital mediante un tratado pueden servir para estimular la iniciativa económica privada e incrementar el bienestar de ambos pueblos;

Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1

Definiciones

Para los fines del presente Tratado:

1.- El concepto de "Inversiones de capital" comprende toda clase de bienes, en especial:

- a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, como hipotecas y derechos de prenda;
- b) derechos de participación en sociedades, y otros tipos de participaciones en sociedades;
- c) derechos a fondos empleados para crear un valor económico o a prestaciones que tengan un valor económico;
- d) derechos de propiedad intelectual, en especial derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, diseños y modelos industriales, marcas, nombres comerciales, secretos industriales y comerciales, procedimientos tecnológicos, know-how y valor llave;

e) concesiones otorgadas por entidades de derecho público, incluidas las concesiones de prospección y explotación; las modificaciones en la forma de inversión de los bienes no afectan a su carácter de inversiones de capital;

2.- El concepto de "rentas" designa aquellas cantidades que corresponden a una inversión de capital por un período determinado, como participantes en los beneficios, dividendos, intereses y derechos de licencia;

3.- El concepto de "nacionales" designa:

a) con referencia a la República Federal de Alemania:

los alemanes en el sentido de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania;

b) con referencia a la República del Ecuador:

las personas que son considerados ecuatorianos de conformidad con la Constitución Política del Ecuador;

4.- El concepto de "sociedades" designa:

a) con referencia a la República Federal de Alemania:

todas las personas jurídicas, así como todas las sociedades comerciales y demás sociedades o asociaciones con o sin personalidad jurídica que tengan su sede en el territorio de la República Federal de Alemania, independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro;

b) con referencia a la República del Ecuador:

toda persona jurídica constituida de conformidad con las leyes y reglamentos ecuatorianos y que tenga su domicilio en el territorio de dicha Parte Contratante, independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.

ARTICULO 2

Fomento de Inversiones.

(1) Cada una de las Partes Contratantes, de acuerdo con sus disposiciones legales vigentes, permitirá dentro de su respectivo territorio, las inversiones de capital de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, promoviéndolas en lo posible. En todo caso tratará justa y equitativamente a las inversiones de capital.

(2) Ninguna de las Partes Contratantes perjudicará en su territorio la administración, la utilización, el uso o el aprovechamiento de las inversiones de capital de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante a través de medidas arbitrarias o discriminatorias.

ARTICULO 3

Tratamiento de Inversiones.

(1) Ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio las inversiones de capital que sean propiedad o estén bajo la influencia de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, a un trato menos favorable que el que se conceda a las inversiones de capital de los propios nacionales y sociedades o a las inversiones de capital de nacionales y sociedades de terceros Estados.

(2) Ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, en cuanto se refiere a sus actividades relacionadas con las inversiones de capital, a un trato menos favorable que a sus propios nacionales y sociedades o a los nacionales y sociedades de terceros Estados.

(3) Dicho trato no se refiere a los privilegios que una de las Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados por formar parte de una unión aduanera o económica, o mercado común o una zona de libre comercio, o a causa de su asociación con tales agrupaciones.

(4) El trato acordado por el presente artículo no se refiere a las ventajas que una de las Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados como consecuencia de un acuerdo para evitar la doble imposición o de otros acuerdos sobre asuntos tributarios.

ARTICULO 4

Protección de inversiones e indemnizaciones en caso de expropiaciones.

(1) Las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante.

(2) Las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes no podrán, en el territorio de la

otra Parte Contratante, ser expropiadas, nacionalizadas, o sometidas a otras medidas que en sus repercusiones equivalgan a expropiación o nacionalización, más que por causas de utilidad pública, y deberán en tal caso ser indemnizadas. La indemnización deberá corresponder al valor de la inversión expropiada inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la expropiación, la nacionalización o la medida equiparable, efectiva o inminente. La indemnización deberá satisfacerse sin demora y devengará intereses hasta la fecha de su pago según el tipo usual de interés bancario; deberá ser efectivamente realizable y libremente transferible. A más tardar en el momento de la expropiación, nacionalización o medida equiparable, deberán haberse tomado debidamente disposiciones para fijar y satisfacer la indemnización. La legalidad de la expropiación, nacionalización o medida equiparable, y la cuantía de la indemnización deberán ser comprobables en procedimiento judicial ordinario.

(3) Los nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones de capital por efecto de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional o motín en el territorio de la otra Parte Contratante no serán tratados por ésta menos favorablemente que sus propios nacionales o sociedades en lo referente a restituciones, ajustes, indemnizaciones u otros pagos. Estas cantidades deberán ser libremente transferibles.

(4) En lo concerniente a las materias reglamentadas en el presente artículo, los nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes gozarán en el territorio de la otra Partes Contratante del trato de la nación más favorecida.

ARTICULO 5

Libres Transferencias.

1.- Cada Parte Contratante garantizará a los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, la libre transferencia de los pagos relacionados con una inversión de capital, especialmente:

- a) del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o ampliación de la inversión de capital;
- b) de las rentas;
- c) de la amortización de préstamos;
- d) del producto de la inversión de capital en caso de

liquidación o enajenación total o parcial;

e) de las indemnizaciones previstas en el artículo 4.

2.- Las transferencias conforme al párrafo 2 ó 3 del artículo 4, al artículo 5 numeral 1 o al artículo 6 se efectuarán sin demora, a la cotización vigente en cada caso.

3.- Dicha cotización deberá coincidir con el tipo cruzado resultante de los tipos de cambio que el Fondo Monetario Internacional aplicaría si en la fecha del pago cambiaran las monedas de los países interesados en derechos especiales de giro.

ARTICULO 6

Subrogación

Si una Parte Contratante realiza pagos a sus nacionales o sociedades en virtud de una garantía otorgada para una inversión de capital en el territorio de la otra Parte Contratante, ésta, sin perjuicio de los derechos que en virtud del artículo 9 corresponden a la primera Parte Contratante, reconocerá el traspaso de todos los derechos de estos nacionales o sociedades a la primera Parte Contratante, bien sea por disposición legal o por acto jurídico. Además, la otra Parte Contratante reconocerá la subrogación de la primera Parte Contratante en todos estos derechos (derechos transferidos), los cuales ésta estará autorizada a ejercer en la misma medida que el titular anterior. Para la transferencia de los pagos en virtud de los derechos transferidos regirán mutatis mutandis los párrafos 2 y 3 del artículo 4 y el artículo 5.

ARTICULO 7

Aplicación de otras normas.

(1) Si las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes o de obligaciones emanadas del Derecho Internacional al margen del presente Tratado, actuales o futuras, entre las Partes Contratantes, resultare una reglamentación general o especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de capital de los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Tratado, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente Tratado, en cuanto sea más favorable.

(2) Cada Parte Contratante cumplirá cualquier otro compromiso que haya contraído con relación a las inversiones de capital de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante en su territorio.

ARTICULO 8

Protección de Inversiones anteriores.

El presente Tratado se aplicará también a las inversiones de capital efectuadas antes de la entrada en vigor del mismo por los nacionales o sociedades de una Parte Contratante conforme a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante en el territorio de ésta última.

ARTICULO 9

Solución de Divergencias entre las Partes Contratantes.

(1) Las divergencias que surgieren entre las Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación del presente Tratado deberán, en lo posible, ser dirimidas por los gobiernos de ambas Partes Contratantes por la vía diplomática.

(2) Si una divergencia no puede ser dirimida de esa manera, en el plazo de seis meses contados a la partir de la presentación formal del reclamo diplomático, ésta será sometida a un tribunal arbitral, a petición de una de las Partes Contratantes.

(3) El tribunal arbitral será constituido ad-hoc; cada Parte Contratante nombrará un miembro, y los dos miembros se podrán de acuerdo para elegir como presidente a un nacional de un tercer Estado que será nombrado por los gobiernos de ambas Partes Contratantes. Los miembros serán nombrados dentro de un plazo de dos meses, el presidente dentro de un plazo de tres meses, después de que una de las Partes Contratantes haya comunicado a la otra que desea someter la divergencia a un tribunal arbitral.

(4) Si los plazos previstos en el párrafo 3 no fueren observados, y a falta de otro arreglo, cada Parte Contratante podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los nombramientos necesarios.

En caso de que el Presidente sea nacional de una de las Partes Contratantes o se halle impedido por otra causa, corresponderá al Vicepresidente efectuar los nombramientos. Si el Vicepresidente también fuere nacional de una de las Partes Contratantes o si se hallare también impedido, corresponderá efectuar los nombramientos al miembro de la Corte que siga

inmediatamente en el orden jerárquico y no sea nacional de una de las Partes Contratantes.

(5) El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones son obligatorias. Cada Parte Contratante sufragará los gastos ocasionados por la actividad de su árbitro así como los gastos de su representación en el procedimiento arbitral; los gastos del Presidente, así como los demás gastos, serán sufragados por partes iguales por las dos Partes Contratantes. No obstante, el Tribunal Arbitral podrá determinar en su decisión que una mayor proporción de los gastos sea sufragada por una de las dos Partes Contratantes. Por lo demás, el tribunal arbitral determinará su propio procedimiento.

(6) Si ambas Partes Contratantes fueren también Estados contratantes del Convenio sobre "Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados" de 18 de marzo de 1965, no se podrá, en atención a la disposición del párrafo 1 del artículo 27 de dicho Convenio, acudir al tribunal arbitral arriba previsto cuando el nacional o la sociedad de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante hayan llegado a un acuerdo conforme al artículo 25 del Convenio. No quedará afectada la posibilidad de acudir al tribunal arbitral arriba previsto en el caso de que no se respete una decisión del Tribunal de Arbitraje del mencionado Convenio (artículo 27), o en el caso de traspaso por disposición legal o por acto jurídico, conforme al artículo 6 del presente Tratado.

ARTICULO 10

Solución de divergencias entre un inversionista y la Parte Contratante receptora de la inversión.

(1) Las divergencias relativas a las disposiciones del presente Tratado entre una Parte Contratante y nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante deberán, en lo posible, ser amigablemente dirimidas.

(2) Si una divergencia no puede ser dirimida dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha en que una de las Partes en litigio la haya hecho valer, será sometida a petición del inversionista:

a) a un tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se haya realizado la inversión.

b) a un tribunal arbitral cuya competencia haya sido previamente convenida por las Partes Contratantes.

En la medida en que las partes en litigio no lleguen a un arreglo en otro sentido las divergencias se someterán a un procedimiento arbitral conforme al Convenio sobre "Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados" de 18 de marzo de 1965.

(3) Cuando el inversionista hubiere sometido la controversia a un Tribunal competente de la Parte Contratante, en cuyo territorio se realizó la inversión, sólo podrá acudir posteriormente a un tribunal de arbitraje en los siguientes casos:

a) si el tribunal nacional competente no hubiere decidido sobre el fondo del asunto planteado en el plazo de 18 meses; o,

b) si el tribunal nacional competente no hubiere observado en su resolución las disposiciones del presente Convenio.

(4) El laudo arbitral según el numeral 2, literal b, será obligatorio y se ejecutará con arreglo al derecho nacional. Un laudo arbitral promulgado conforme al Convenio sobre "Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados" de 18 de marzo de 1965 no podrá ser objeto de otros recursos o acciones legales que los previstos en el mencionado convenio.

(5) La Parte Contratante implicada en el litigio no podrá alegar durante un procedimiento arbitral o la ejecución de un laudo arbitral el hecho de que el nacional o la sociedad de la otra Parte Contratante haya recibido una indemnización resultante de un seguro por una parte del daño o por el daño total.

ARTICULO 11

Relaciones Consulares o Diplomáticas.

El presente Tratado regirá independientemente de que existan o no relaciones diplomáticas o consulares entre las Partes Contratantes.

ARTICULO 12

Entrada en vigor y vigencia.

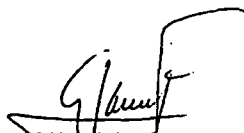
(1) El presente Tratado será ratificado; los instrumentos de ratificación serán canjeados lo antes posible en la ciudad de Bonn.

(2) El presente Tratado entrará en vigor un mes después de la fecha en que se haya efectuado el canje de los instrumentos de ratificación. Su validez será de diez años y se prolongará después por tiempo indefinido, a menos que fuera denunciado por escrito por una de las Partes Contratantes doce meses antes de su expiración. Transcurridos diez años, el Tratado podrá denunciarse en cualquier momento con un preaviso de doce meses.

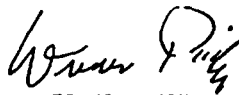
(3) Para inversiones de capital realizadas hasta el momento de expiración del presente Tratado, las disposiciones de los artículos 1 al 11 seguirán rigiendo desde los quince años subsiguientes a la fecha en que haya expirado la vigencia del presente Tratado.

(4) Con la entrada en vigor del presente Tratado dejará de regir el Tratado entre la República del Ecuador y la República federal de Alemania sobre Fomento y Recíproca Inversiones de capital del 28 de junio de 1965.

Hecho en Quito, el veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y seis, en dos ejemplares, en lenguas española y alemana, siendo ambos textos igualmente auténticos.



GALO LEORO F.
POR LA REPUBLICA DEL ECUADOR



WERNER PIECK
POR LA REPUBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA

PROTOCOLO

En el acto de la firma del Tratado entre la República Federal de Alemania y la República del Ecuador sobre fomento y recíproca protección de inversiones de capital, los infrascritos plenipotenciarios han adoptado además las siguientes disposiciones, que se considerarán como parte integrante del Tratado:

(1) Ad artículo 1

a) Las rentas de una inversión de capital, y en el caso de su reinversión también las rentas de éstas, gozarán de igual protección que la inversión misma.

b) Sin perjuicio de otros procedimientos para determinar la nacionalidad, se considerará en especial como nacional de una Parte Contratante a toda persona que posea un pasaporte nacional extendido por las autoridades competentes de la respectiva Parte Contratante.

(2) Ad artículo 2

a) Gozarán de la plena protección del Tratado las inversiones de capital que, de acuerdo con las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, haya sido realizadas en el territorio de ésta Parte Contratante por nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante.

b) El Tratado regirá también en aquellas zonas marítimas adyacentes al límite exterior del mar territorial del territorio nacional sobre las cuales la Parte Contratante concernida pueda, de conformidad con su legislación y el Derecho Internacional, ejercer soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.

(3) Ad artículo 3

a) Como "actividades" en el sentido del párrafo 2 del artículo 3 se considerarán especial pero no exclusivamente la administración, la utilización, el uso y el aprovechamiento de una inversión de capital. Se considerará especialmente como trato "menos favorable" en el sentido del artículo 3 el trato desigual en caso de limitaciones en la adquisición de materias primas y auxiliares, energía y combustibles, así como medios de producción y explotación de todas clases, el trato desigual en caso de obstaculización de la venta de productos en el interior del país y en el extranjero, y toda medida de efectos análogos.

No se considerarán como trato "menos favorable" en el sentido del artículo 3 las medidas que se tomen por razones de seguridad y orden público, sanidad pública o moralidad.

b) Las disposiciones del artículo 3 no obligan a una Parte Contratante a extender las ventajas, exenciones y reducciones fiscales que según las leyes tributarias sólo se concedan a las personas naturales y sociedades residentes en su territorio a las personas naturales y sociedades residentes en el territorio de la otra Parte Contratante.

c) Las Partes Contratantes, de acuerdo con sus disposiciones legales internas, tramitarán con benevolencia las solicitudes de inmigración y residencia de personas de una de las Partes Contratantes que, en relación con una inversión de capital, quieran entrar en el territorio de la otra Parte Contratante; la misma norma regirá para los asalariados de una Parte Contratante que, en relación con una inversión de capital, quieran entrar y residir en el territorio de la otra Parte Contratante para ejercer su actividad como asalariados. Igualmente se tramitarán con benevolencia las solicitudes de permiso de trabajo.

(4) Ad artículo 4

El derecho a indemnización se da aun en el caso de que se intervenga a través de medidas estatales en la empresa objeto de la inversión, y como consecuencia de ello se produzca un considerable perjuicio para la sustancia económica de la misma.

(5) Ad artículo 5

Una transferencia se considerará realizada "sin demora" en el sentido del numeral 2 del artículo 5 cuando se haya efectuado dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las formalidades de transferencia. El plazo que en ningún caso podrá exceder de dos meses, comenzará a correr en el momento de entrega de la correspondiente.

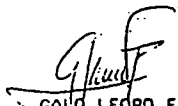
(6) Respecto a los transportes de mercancías y personas en relación con inversiones de capital, cada una de las Partes Contratante no excluirá ni pondrá trabas a las empresas de transporte de la otra Parte Contratante y, en caso necesario, concederá autorizaciones para la realización de los transportes. Quedan comprendidos los transportes de:

a) mercancías destinadas directamente a una inversión de capital en el sentido del Tratado, o adquiridas en el

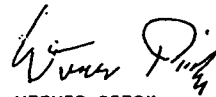
territorio de una Parte Contratante o de un tercer Estado por una empresa o por encargo de una empresa en que haya capital invertido en el sentido del Tratado:

b) personas que viajen en relación con una inversión de capital.

Hecho en Quito, el veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y seis, en dos ejemplares, en lengua española y alemana, siendo ambos textos igualmente auténticos.



GALO LEORO F.
POR LA REPUBLICA DEL ECUADOR



WERNER PIECK
POR LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND]

**Vertrag
zwischen
der Republik Ecuador
und
der Bundesrepublik Deutschland
über
die Förderung und den gegenseitigen Schutz von
Kapitalanlagen**

Die Republik Ecuador
und
die Bundesrepublik Deutschland -

in dem Wunsch, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten zu vertiefen,

in dem Bestreben, günstige Bedingungen für Kapitalanlagen von Staatsangehörigen oder Gesellschaften des einen Staates im Hoheitsgebiet des anderen Staates zu schaffen,

in der Erkenntnis, daß eine Förderung und ein vertraglicher Schutz dieser Kapitalanlagen geeignet sind, die private wirtschaftliche Initiative zu beleben und den Wohlstand beider Völker zu mehren -

haben folgendes vereinbart:

Artikel 1
Definitionen

Für die Zwecke dieses Vertrags

1.umfaßt der Begriff "Kapitalanlagen" Vermögenswerte jeder Art, insbesondere

a)Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen sowie sonstige dingliche Rechte wie Hypotheken und Pfandrechte;

b)Anteilsrechte an Gesellschaften und andere Arten von Beteiligungen an Gesellschaften;

c)Ansprüche auf Geld, das verwendet wurde, um einen wirtschaftlichen Wert zu schaffen, oder Ansprüche auf Leistungen, die einen wirtschaftlichen Wert haben;

d)Rechte des geistigen Eigentums, insbesondere Urheberrechte, Patente, Gebrauchsmuster, gewerbliche Muster und Modelle, Marken, Handelsnamen, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, technische Verfahren, Know-how und Goodwill;

e)Öffentlich-rechtliche Konzessionen einschließlich Aufsuchungs- und Gewinnungskonzessionen;

eine Änderung der Form, in der Vermögenswerte angelegt werden, läßt ihre Eigenschaft als Kapitalanlage unberührt;

2.bezeichnet der Begriff "Erträge" diejenigen Beträge, die auf eine Kapitalanlage für einen bestimmten Zeitraum anfallen, wie Gewinnanteile, Dividenden, Zinsen und Lizenzentgelte;

3.bezeichnet der Begriff "Staatsangehörige"

a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland,

b) in bezug auf die Republik Ecuador:
Ecuadorianer im Sinne der politischen Verfassung der Republik Ecuador;

4. bezeichnet der Begriff "Gesellschaften"

a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:
jede juristische Person sowie jede Handelsgesellschaft oder sonstige Gesellschaft oder Vereinigung mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, die ihren Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland hat, gleichviel, ob ihre Tätigkeit auf Gewinn gerichtet ist oder nicht,

b) in bezug auf die Republik Ecuador:
alle juristischen Personen, die nach den geltenden ecuadorianischen Gesetzen und Regelungen bestehen und ihren Sitz im Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei haben, gleichviel, ob ihre Tätigkeit auf Gewinn gerichtet ist oder nicht.

Artikel 2 Förderung von Kapitalanlagen

(1) Jede Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiet Kapitalanlagen von Staatsangehörigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei nach Möglichkeit fördern und diese Kapitalanlagen in Übereinstimmung mit ihren Rechtsvorschriften zulassen. Sie wird Kapitalanlagen in jedem Fall gerecht und billig behandeln.

(2) Eine Vertragspartei wird die Verwaltung, die Verwendung, den Gebrauch oder die Nutzung der Kapitalanlagen von Staatsangehörigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet in keiner Weise durch willkürliche oder diskriminierende Maßnahmen beeinträchtigen.

Artikel 3 Behandlung von Kapitalanlagen

(1) Jede Vertragspartei behandelt Kapitalanlagen in ihrem Hoheitsgebiet, die im Eigentum oder unter dem Einfluß von Staatsangehörigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei stehen, nicht weniger günstig als Kapitalanlagen der eigenen Staatsangehörigen und Gesellschaften oder Kapitalanlagen von Staatsangehörigen und Gesellschaften dritter Staaten.

(2) Jede Vertragspartei behandelt Staatsangehörige oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei hinsichtlich ihrer Betätigung im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in ihrem Hoheitsgebiet nicht weniger günstig als ihre eigenen Staatsangehörigen und Gesellschaften oder Staatsangehörige und Gesellschaften dritter Staaten.

(3) Diese Behandlung bezieht sich nicht auf Vorrechte, die eine Vertragspartei den Staatsangehörigen oder Gesellschaften dritter Staaten wegen ihrer Mitgliedschaft in einer Zoll- oder Wirtschaftsunion, einem gemeinsamen Markt oder einer Freihandelszone oder wegen ihrer Assoziation damit einräumt.

(4)Die in diesem Artikel gewährte Behandlung bezieht sich nicht auf Vergünstigungen, die eine Vertragspartei den Staatsangehörigen oder Gesellschaften dritter Staaten aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder sonstiger Vereinbarungen über Steuerfragen gewährt.

Artikel 4 Eigentumsschutz und Entschädigung bei Enteignung

(1)Kapitalanlagen von Staatsangehörigen oder Gesellschaften einer Vertragspartei genießen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei vollen Schutz und volle Sicherheit.

(2)Kapitalanlagen von Staatsangehörigen oder Gesellschaften einer Vertragspartei dürfen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei nur zum allgemeinen Wohl und gegen Entschädigung enteignet, verstaatlicht oder anderen Maßnahmen unterworfen werden, die in ihren Auswirkungen einer Enteignung oder Verstaatlichung gleichkommen. Die Entschädigung muß dem Wert der enteigneten Kapitalanlage unmittelbar vor dem Zeitpunkt entsprechen, in dem die tatsächliche oder drohende Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbare Maßnahme öffentlich bekannt wurde. Die Entschädigung muß unverzüglich geleistet werden und ist bis zum Zeitpunkt der Zahlung mit dem üblichen bankmäßigen Zinssatz zu verzinsen; sie muß tatsächlich verwertbar und frei transferierbar sein. Spätestens im Zeitpunkt der Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbaren Maßnahme muß in geeigneter Weise für die Festsetzung und Leistung der Entschädigung Vorsorge getroffen sein. Die Rechtmäßigkeit der Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbaren Maßnahme und die Höhe der Entschädigung müssen in einem ordentlichen Rechtsverfahren nachgeprüft werden können.

(3)Staatsangehörige oder Gesellschaften einer Vertragspartei, die durch Krieg oder sonstige bewaffnete Auseinandersetzungen, Revolution, Staatsnotstand oder Aufruhr im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei Verluste an Kapitalanlagen erleiden, werden von dieser Vertragspartei hinsichtlich der Rückerstattungen, Abfindungen, Entschädigungen oder sonstigen Gegenleistungen nicht weniger günstig behandelt als ihre eigenen Staatsangehörigen oder Gesellschaften. Solche Zahlungen müssen frei transferierbar sein.

(4)Hinsichtlich der in diesem Artikel geregelten Angelegenheiten genießen die Staatsangehörigen oder Gesellschaften einer Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei Meistbegünstigung.

Artikel 5 Freier Transfer

(1)Jede Vertragspartei gewährleistet den Staatsangehörigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei den freien Transfer der im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage stehenden Zahlungen, insbesondere

a)des Kapitals und zusätzlicher Beträge zur Aufrechterhaltung oder Ausweitung der Kapitalanlage;

b) der Erträge;

c) zur Rückzahlung von Darlehen;

d) des Erlöses im Fall vollständiger oder teilweiser Liquidation oder Veräußerung der Kapitalanlage;

e) der in Artikel 4 vorgesehenen Entschädigungen.

(2) Transferierungen nach Artikel 4 Absatz 2 oder 3, Artikel 5 Absatz 1 oder Artikel 6 erfolgen unverzüglich zu dem jeweils gültigen Kurs.

(3) Dieser Kurs muß dem Kreuzkurs (cross rate) entsprechen, der sich aus denjenigen Umrechnungskursen ergibt, die der Internationale Währungsfonds zum Zeitpunkt der Zahlung Umrechnungen der betreffenden Währungen in Sonderziehungsrechte zugrunde legen würde.

Artikel 6 Subrogation

Leistet eine Vertragspartei ihren Staatsangehörigen oder Gesellschaften Zahlungen aufgrund einer Gewährleistung für eine Kapitalanlage im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei, so erkennt diese andere Vertragspartei, unbeschadet der Rechte der erstgenannten Vertragspartei aus Artikel 9, die Übertragung aller Rechte und Ansprüche dieser Staatsangehörigen oder Gesellschaften kraft Gesetzes oder aufgrund Rechtsgeschäfts auf die erstgenannte Vertragspartei an. Ferner erkennt die andere Vertragspartei den Eintritt der erstgenannten Vertragspartei in alle diese Rechte oder Ansprüche (Übertragene Ansprüche) an, welche die erstgenannte Vertragspartei in demselben Umfang wie ihr Rechtsvorgänger auszuüben berechtigt ist. Für den Transfer von Zahlungen aufgrund der übertragenen Ansprüche gelten Artikel 4 Absätze 2 und 3 und Artikel 5 entsprechend.

Artikel 7 Anwendung anderer Vorschriften

(1) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei oder aus völkerrechtlichen Verpflichtungen, die neben diesem Vertrag zwischen den Vertragsparteien bestehen oder in Zukunft begründet werden, eine allgemeine oder besondere Regelung, durch die den Kapitalanlagen der Staatsangehörigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei eine günstigere Behandlung als nach diesem Vertrag zu gewähren ist, so geht diese Regelung dem vorliegenden Vertrag insoweit vor, als sie günstiger ist.

(2) Jede Vertragspartei wird jede andere Verpflichtung einhalten, die sie in bezug auf Kapitalanlagen von Staatsangehörigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet übernommen hat.

Artikel 8
Schutz von Altinvestitionen

Dieser Vertrag gilt auch für Kapitalanlagen, die Staatsangehörige oder Gesellschaften der einen Vertragspartei in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartei in deren Hoheitsgebiet schon vor dem Inkrafttreten dieses Vertrags vorgenommen haben.

Artikel 9
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien

(1) Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrags sollen, soweit möglich, auf diplomatischem Wege durch die Regierungen der beiden Vertragsparteien beigelegt werden.

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit auf diese Weise nicht binnen einer Frist von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Vorlage einer förmlichen diplomatischen Eingabe beigelegt werden, so wird sie auf Verlangen einer Vertragspartei einem Schiedsverfahren unterworfen.

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet, indem jede Vertragspartei ein Mitglied bestellt und beide Mitglieder sich auf den Angehörigen eines dritten Staates als Obmann einigen, der von den Regierungen der beiden Vertragsparteien zu bestellen ist. Die Mitglieder sind innerhalb von zwei Monaten, der Obmann innerhalb von drei Monaten zu bestellen, nachdem die eine Vertragspartei der anderen mitgeteilt hat, daß sie die Meinungsverschiedenheit einem Schiedsgericht unterbreiten will.

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jede Vertragspartei den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofs bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt der Präsident die Staatsangehörigkeit einer der beiden Vertragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund verhindert, so soll der Vizepräsident die Ernennungen vornehmen. Besitzt auch der Vizepräsident die Staatsangehörigkeit einer der beiden Vertragsparteien oder ist auch er verhindert, so soll das im Rang nächstfolgende Mitglied des Gerichtshofs, das nicht die Staatsangehörigkeit einer der beiden Vertragsparteien besitzt, die Ernennungen vornehmen.

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind bindend. Jede Vertragspartei trägt die Kosten ihres Mitglieds sowie ihrer Vertretung in dem Verfahren vor dem Schiedsgericht; die Kosten des Obmanns sowie die sonstigen Kosten werden von den beiden Vertragsparteien zu gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht kann in seinem Schiedsspruch bestimmen, daß eine der beiden Vertragsparteien einen höheren Kostenanteil zu tragen hat. Im Übrigen regelt das Schiedsgericht sein Verfahren selbst.

(6) Sind beide Vertragsparteien auch Vertragsstaaten des Übereinkommens vom 18. März 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten, so kann mit Rücksicht auf die Regelung in Artikel

27 Absatz 1 des Übereinkommens das vorstehend vorgesehene Schiedsgericht insoweit nicht angerufen werden, als zwischen dem Staatsangehörigen oder der Gesellschaft einer Vertragspartei und der anderen Vertragspartei eine Vereinbarung nach Maßgabe des Artikels 25 des Übereinkommens zustande gekommen ist. Die Möglichkeit, das vorstehend vorgesehene Schiedsgericht im Fall der Nichtbeachtung einer Entscheidung des Schiedsgerichts des genannten Übereinkommens (Artikel 27) oder im Fall der Übertragung kraft Gesetzes oder aufgrund Rechtsgeschäfts nach Artikel 6 dieses Vertrags anzurufen, bleibt unberührt.

Artikel 10

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Investor und Gaststaat

- (1) Meinungsverschiedenheiten zwischen einer Vertragspartei und Staatsangehörigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei hinsichtlich der Bestimmungen dieses Vertrags sollen, soweit möglich, gütlich beigelegt werden.
- (2) Kann eine Meinungsverschiedenheit innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Geltendmachung durch eine der beiden Streitparteien nicht beigelegt werden, so ist sie auf Verlangen des Investors vorzulegen:
 - a) einem zuständigen Gericht derjenigen Vertragspartei, auf deren Hoheitsgebiet sich die Kapitalanlage befindet;
 - b) einem Schiedsgericht, dessen Zuständigkeit zuvor von den Vertragsparteien vereinbart wurde. Sofern die Parteien hierzu keine abweichende Vereinbarung treffen, wird die Meinungsverschiedenheit einem Schiedsverfahren im Rahmen des Übereinkommens vom 18. März 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten unterworfen.
- (3) Hat der Investor die Meinungsverschiedenheit einem zuständigen Gericht derjenigen Vertragspartei, auf deren Hoheitsgebiet sich die Kapitalanlage befindet unterbreitet, so kann er sich später nur noch in den folgenden Fällen an ein Schiedsgericht wenden:
 - a) wenn das zuständige nationale Gericht nicht innerhalb einer Frist von 18 Monaten über den ihm unterbreiteten Streitfall entschieden hat; oder
 - b) wenn das zuständige nationale Gericht bei einer Entscheidung Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrags nicht beachtet hat.
- (4) Der Schiedsspruch nach Absatz 2 Buchstabe b ist bindend und wird nach innerstaatlichem Recht vollstreckt. Ein Schiedsspruch, der nach dem Übereinkommen vom 18. März 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten ergangen ist, unterliegt keinen anderen als den in diesem Übereinkommen vorgesehenen Rechtsmitteln oder sonstigen Rechtsbehelfen.

(5) Die an der Streitigkeit beteiligte Vertragspartei kann während eines Schiedsverfahrens oder der Vollstreckung eines Schiedsspruchs nicht als Einwand geltend machen, daß der Staatsangehörige oder die Gesellschaft der anderen Vertragspartei eine Entschädigung für einen Teil des Schadens oder den Gesamtschaden aus einer Versicherung erhalten hat.

Artikel 11
Konsularische oder diplomatische Beziehungen

Dieser Vertrag gilt unabhängig davon, ob zwischen den beiden Vertragsparteien diplomatische oder konsularische Beziehungen bestehen.

Artikel 12
Inkrafttreten und Geltungsdauer

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich in Bonn ausgetauscht.

(2) Dieser Vertrag tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. Er bleibt zehn Jahre lang in Kraft; nach deren Ablauf verlängert sich die Geltungsdauer auf unbegrenzte Zeit, sofern nicht eine der beiden Vertragsparteien den Vertrag mit einer Frist von zwölf Monaten vor Ablauf schriftlich kündigt. Nach Ablauf von zehn Jahren kann der Vertrag jederzeit mit einer Frist von zwölf Monaten gekündigt werden.

(3) Für Kapitalanlagen, die bis zum Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieses Vertrags vorgenommen worden sind, gelten die Artikel 1 bis 11 noch für weitere fünfzehn Jahre vom Tag des Außerkrafttretens des Vertrags an.

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags tritt der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Ecuador über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen vom 28. Juni 1965 außer Kraft.

Geschehen zu Quito am einundzwanzigsten März Neunzehnhundertsechundneunzig in zwei Urschriften, jede in spanischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.


Dr. Galeo Leoro Franco Dr. Werner Pieck
Aussenminister Botschafter


Für die Für die
Republik Ecuador Bundesrepublik Deutschland

Protokoll

Bei der Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Republik Ecuador und der Bundesrepublik Deutschland über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten außerdem folgende Bestimmungen vereinbart, die als Bestandteile des Vertrags gelten:

(1) Zu Artikel 1

- a) Erträge aus der Kapitalanlage und im Fall ihrer Wiederanlage auch deren Erträge genießen den gleichen Schutz wie die Kapitalanlage.
- b) Unbeschadet anderer Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit gilt insbesondere als Staatsangehöriger einer Vertragspartei jede Person, die einen von den zuständigen Behörden der betreffenden Vertragspartei ausgestellten nationalen Reisepaß besitzt.

(2) Zu Artikel 2

- a) Kapitalanlagen, die in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet von Staatsangehörigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei vorgenommen sind, genießen den vollen Schutz des Vertrags.
- b) Der Vertrag gilt auch in jenen den Territorialgewässern einer jeden Vertragspartei vorgelagerten Meeresgebieten, in denen die betreffende Vertragspartei im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht und dem Völkerrecht souveräne Rechte oder Hoheitsbefugnisse ausübt.

(3) Zu Artikel 3

- a) Als "Betätigung" im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 ist insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Verwaltung, die Verwendung, der Gebrauch und die Nutzung einer Kapitalanlage anzusehen. Als eine "weniger günstige" Behandlung im Sinne des Artikels 3 ist insbesondere anzusehen: die unterschiedliche Behandlung im Falle von Einschränkungen des Bezugs von Roh- und Hilfsstoffen, Energie und Brennstoffen sowie Produktions- und Betriebsmitteln aller Art, die unterschiedliche Behandlung im Falle von Behinderungen des Absatzes von Erzeugnissen im In- und Ausland sowie sonstige Maßnahmen mit ähnlicher Auswirkung. Maßnahmen, die aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Volksgesundheit oder Sittlichkeit zu treffen sind, gelten nicht als "weniger günstige" Behandlung im Sinne des Artikels 3.
- b) Die Bestimmungen des Artikels 3 verpflichten eine Vertragspartei nicht, steuerliche Vergünstigungen, Befreiungen und Ermäßigungen, welche gemäß den Steuergesetzen nur den in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen natürlichen Personen und Gesellschaften gewährt werden, auf im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei ansässige natürliche Personen und Gesellschaften auszudehnen.

c) Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften Anträge auf die Einreise und den Aufenthalt von Personen der einen Vertragspartei, die im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei einreisen wollen, wohlwollend prüfen; das gleiche gilt für Arbeitnehmer der einen Vertragspartei, die im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei einreisen und sich dort aufhalten wollen, um eine Tätigkeit als Arbeitnehmer auszuüben. Auch Anträge auf Erteilung der Arbeitserlaubnis werden wohlwollend geprüft.

(4) Zu Artikel 4

Ein Anspruch auf Entschädigung besteht auch dann, wenn durch staatliche Maßnahmen in das Unternehmen, das Gegenstand der Kapitalanlage ist, eingegriffen und dadurch seine wirtschaftliche Substanz erheblich beeinträchtigt wird.

(5) Zu Artikel 5

Als "unverzüglich" durchgeführt im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 gilt ein Transfer, der innerhalb einer Frist erfolgt, die normalerweise zur Beachtung der Transferförmlichkeiten erforderlich ist. Die Frist beginnt mit der Einreichung eines entsprechenden Antrags und darf unter keinen Umständen zwei Monate überschreiten.

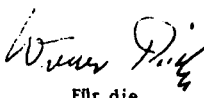
(6) Bei Beförderungen von Gütern und Personen, die im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage stehen, wird eine Vertragspartei die Transportunternehmen der anderen Vertragspartei weder ausschalten noch behindern und, soweit erforderlich, Genehmigungen zur Durchführung der Transporte erteilen. Hierunter fallen Beförderungen von

a) Gütern, die unmittelbar für die Kapitalanlage im Sinne des Vertrags bestimmt sind oder die im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei oder eines dritten Staates von einem Unternehmen oder im Auftrag eines Unternehmens angeschafft werden, in dem Vermögenswerte im Sinne des Vertrags angelegt sind;

b) Personen, die im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage reisen.

Geschehen zu Quito am einundzwanzigsten März Neunzehnhundertsechundneunzig in zwei Urschriften, jede in spanischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.


Für die
Republik Ecuador
Dr. Galo Plaza Lasso
Aussenminister


Für die
Bundesrepublik Deutschland
Dr. Werner Pieck
Botschafter

[TRANSLATION - TRADUCTION]

TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF ECUADOR AND THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL
PROTECTION OF CAPITAL INVESTMENTS

The Republic of Ecuador and the Federal Republic of Germany,
Desiring to intensify economic cooperation between the two States,
Seeking to create favourable conditions for capital investments by nationals and companies of one State in the territory of the other State,
Recognizing that the promotion of such capital investments and their protection by means of a treaty could stimulate private enterprise and enhance the well-being of both peoples,

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the purposes of this Treaty:

1. The term "capital investments" shall include all types of assets, in particular:
 - (a) Ownership of movable and immovable property and any other rights in rem, such as mortgages, liens and pledges;
 - (b) Stocks in companies and other forms of participation in companies;
 - (c) Claims to money which has been used to create an economic value or to benefits having an economic value;
 - (d) intellectual property rights, in particular, copyrights, patents, utility models, industrial designs and models, trade marks and trade names, industrial and commercial secrets, technical processes, know-how and goodwill;
 - (e) Business concessions under public law, including concessions to prospect for, extract and exploit natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as capital investments.

2. The term "income" shall mean the amounts yielded by a capital investment for a given period, such as profit sharing, dividends, interest and licence fees.

3. The term "nationals" shall mean:

- (a) In respect of the Federal Republic of Germany:

 Germans within the meaning of the Basic Law of the Federal Republic of Germany;

- (b) In respect of the Republic of Ecuador:

 Ecuadorians within the meaning of the Constitution of Ecuador.

4. The term "companies" shall mean:

- (a) In respect of the Federal Republic of Germany:

Any legal entity, as well as any commercial or other company or association, with or without legal personality, having its principal place of business in the territory of the Federal Republic of Germany, whether or not its activities are for profit;

(b) In respect of the Republic of Ecuador:

Any legal entity constituted in accordance with Ecuadorian laws and regulations and domiciled in the territory of that Contracting Party, whether or not its activities are for profit.

Article 2. Promotion of investments

1. Each Contracting Party shall promote capital investments by nationals or companies of the other Contracting Party in its territory, to the extent possible, and shall admit such investments in accordance with its legal provisions. In any case, it shall accord fair and equitable treatment to capital investments.

2. Neither Contracting Party shall impede the management, utilization, use or enjoyment of the capital investments of nationals or companies of the other Contracting Party in its territory through arbitrary or discriminatory measures.

Article 3. Treatment of investments

1. Neither Contracting Party shall subject capital investments in its territory belonging to or under the control of nationals or companies of the other Contracting Party to treatment less favourable than that accorded to capital investments of its own nationals or companies or capital investments of nationals or companies of third States.

2. Neither Contracting Party shall subject nationals or companies of the other Contracting Party, as regards their activities in connection with capital investments in its territory, to treatment less favourable than that accorded to its own nationals or companies or to nationals or companies of third States.

3. Such treatment shall not include privileges which may be extended by either Contracting Party to nationals or companies of third States on account of its membership in a customs or economic union, common market or free trade area or its association with such groupings.

4. The treatment under this article shall not include privileges accorded by a Contracting Party to nationals or companies of third States by virtue of an agreement for the avoidance of double taxation or other tax agreements.

Article 4. Protection of investments and compensation in the event of expropriation

1. Capital investments by nationals or companies of one Contracting Party shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

2. Capital investments by nationals or companies of one Contracting Party in the territory of the other Party shall not be expropriated, nationalized or subjected to any other measure, the effects of which would be comparable to expropriation or nationalization, except

for reasons of public interest and against compensation. The compensation shall be equivalent to the value of the expropriated investment immediately before the effective or impending expropriation, nationalization or comparable measure became public knowledge. The compensation shall be paid without delay and shall carry the usual bank interest until the date of payment; it shall be readily convertible and freely transferable. At the latest, by the time of the expropriation, nationalization or comparable measure, the necessary steps shall have been taken to determine and pay the compensation. The legality of the expropriation, nationalization or comparable measure and the amount of compensation shall be subject to review in an ordinary judicial proceeding.

3. Nationals or companies of one Contracting Party whose capital investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency or insurrection shall be accorded by that Contracting Party treatment no less favourable than that accorded to its own nationals or companies as regards restitution, settlement, compensation or other payments. Such payments shall be freely transferable.

4. Nationals or companies of one Contracting Party shall enjoy most-favoured-nation treatment in the territory of the other Contracting Party in respect of the matters regulated in this article.

Article 5. Free transfer of payments

1. Each Contracting Party shall guarantee to nationals or companies of the other Contracting Party the free transfer of payments in connection with a capital investment, in particular:

- (a) Capital and additional amounts to maintain or increase the capital investment;
- (b) Income;
- (c) Repayment of loans;
- (d) Proceeds of the liquidation or transfer of all or part of the capital investment;
- (e) The compensation provided for in article 4.

2. Transfers made in accordance with article 4, paragraphs 2 and 3, article 5, paragraph 1, and article 6 shall be effected without delay at the exchange rate in force in each case.

3. Such rate shall correspond to the cross rate resulting from the exchange rates that the International Monetary Fund would apply if, on the date of payment, the currencies of the countries concerned were converted to special drawing rights.

Article 6. Subrogation

If one Contracting Party makes payments to its nationals or companies under a guarantee granted for a capital investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall, without prejudice to the rights of the former Contracting Party under article 9, recognize the transfer, whether under a law or pursuant to a legal transaction, of all rights of such nationals or companies to the former Contracting Party. The latter Contracting Party shall also recognize the subrogation of the former Contracting Party in

respect of all such rights (transferred rights), which it shall be authorized to exercise to the same extent as its predecessor in title. For the transfer of payments by virtue of the transferred rights, article 4, paragraphs 2 and 3, and article 5 shall apply *mutatis mutandis*.

Article 7. Application of other regulations

1. If the legislation of one Contracting Party or obligations under international law currently existing or to be established between the Contracting Parties, other than this Treaty, contain a regulation, whether general or specific, entitling capital investments by nationals or companies of the other Contracting Party to treatment more favourable than that provided for by this Treaty, such regulation shall, to the extent that it is more favourable, take precedence over this Treaty.

2. Each Contracting Party shall observe any other obligation that it may have entered into with regard to capital investments in its territory by nationals or companies of the other Contracting Party.

Article 8. Protection of prior investments

This Treaty shall also apply to capital investments made prior to its entry into force by nationals or companies of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter Party.

Article 9. Settlement of disputes between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Treaty shall, as far as possible, be settled by the Governments of the two Contracting Parties through the diplomatic channel

2. If a dispute cannot be settled in this way within six months from the formal presentation of a diplomatic complaint, it shall, at the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal.

3. The arbitral tribunal shall be established on an ad hoc basis. Each Contracting Party shall appoint one member and the two members shall, by agreement, designate a national of a third State as Chairman, who shall be appointed by the Governments of the two Contracting Parties. The members shall be appointed within two months and the Chairman within three months after one Contracting Party has informed the other Party of its intention to submit the dispute to an arbitral tribunal.

4. If the time limits set out in paragraph 3 are not observed, and in the absence of any other agreement, either Contracting Party may request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of one of the Contracting Parties or is otherwise prevented from discharging the said function, the appointments shall be made by the Vice-President. If the Vice-President is also a national of one of the Contracting Parties or is also prevented from discharging the said function, the appointments shall be made by the member of the Court next in seniority who is not a national of either Contracting Party.

5. The arbitral tribunal shall take its decisions by a majority of votes. Its decisions shall be binding. Each Contracting Party shall bear the costs of its own arbitrator and the costs of its representation in the arbitral proceedings. The costs of the Chairman and the other remaining costs shall be borne equally by the two Contracting Parties. However, the arbitral tribunal may determine in its decision that a greater proportion of the costs should be borne by one of the Contracting Parties. In all other respects, the tribunal shall determine its own procedures.

6. If both Contracting Parties are also parties to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States of 18 March 1965, recourse may not be had to the arbitral tribunal provided for above, in view of the provisions of article 27, paragraph 1, of the Convention, when an agreement has been reached between the national or company of one Contracting Party and the other Contracting Party under article 25 of the Convention. The possibility of recourse to the above arbitral tribunal shall not be affected in the case of non-compliance with a decision of the arbitral tribunal established under the Convention (article 27) or in the case of a transfer under a law or pursuant to a legal transaction in accordance with article 6 of this Treaty.

*Article 10. Settlement of disputes between an investor and
the Contracting Party that received the investment*

1. Disputes between one Contracting Party and nationals or companies of the other Contracting Party relating to the provisions of this Treaty shall, as far as possible, be settled amicably.

2. If a dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the parties to the dispute gave notice thereof, it shall, at the request of the investor, be submitted:

(a) To a competent court of the Contracting Party in whose territory the investment was made;

(b) To an arbitral tribunal whose competence has been accepted by the Contracting Parties. Unless the parties to the dispute agree otherwise, disputes shall be submitted to arbitral proceedings under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States of 18 March 1965.

3. If the investor has submitted the dispute to a competent court of the Contracting Party in whose territory the investment was made, he may have recourse subsequently to an arbitral tribunal only in the following cases:

(a) If the competent national court has not ruled on the merits of the case within 18 months; or

(b) If the competent national court has not complied with the provisions of this Treaty in making its award.

4. The arbitral award under 2 (b) shall be binding and shall be enforced in accordance with national law. An arbitral award issued in accordance with the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States of 18 March

1965 shall not be subject to appeals or legal actions other than those provided for in that Convention.

5. The Contracting Party involved in the dispute shall not, during arbitral proceedings or the enforcement of an arbitral award, invoke the fact that the national or company of the other Contracting Party has received insurance compensation for all or part of the loss or injury.

Article 11. Diplomatic or consular relations

This Treaty shall apply regardless of whether or not diplomatic or consular relations exist between the Contracting Parties.

Article 12. Entry into force and duration

1. This Treaty shall be ratified; the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible in Bonn.

2. This Treaty shall enter into force one month after the date of the exchange of the instruments of ratification. It shall remain in force for a period of 10 years and shall be renewed thereafter for an indefinite period unless one of the Contracting Parties denounces it in writing 12 months before its expiry. After 10 years, the Treaty may be denounced at any time by giving 12 months' advance notice.

3. For capital investments made prior to the expiry of this Treaty, the provisions of articles 1 to 11 shall remain in force for 15 years from the date on which the validity of the Treaty expired.

4. When this Treaty enters into force, the Treaty between the Republic of Ecuador and the Federal Republic of Germany on the promotion and reciprocal protection of capital investments of 28 June 1965 shall cease to apply.

Done at Quito on 21 March 1996, in two copies, each in the Spanish and German languages, both texts being equally authentic.

For the Republic of Ecuador:

DR. GALO LEORO FRANCO

For the Federal Republic of Germany:

DR. WERNER PIECK

PROTOCOL

In signing the Treaty between the Federal Republic of Germany and the Republic of Ecuador on the promotion and reciprocal protection of capital investments, the undersigned plenipotentiaries also adopted the following additional provisions, which shall be deemed an integral part of the Treaty:

1. To article 1:

(a) Income from a capital investment and, in the event of its reinvestment, income therefrom shall enjoy the same protection as the investment itself;

(b) Without prejudice to other procedures for determining nationality, any person in possession of a national passport issued by the competent authorities of one Contracting Party shall, in particular, be deemed a national of that Party.

2. To article 2:

(a) Capital investments which, in accordance with the legal provisions of one of the Contracting Parties, have been made in the territory of that Contracting Party by nationals or companies of the other Contracting Party shall enjoy the full protection of the Treaty;

(b) The Treaty shall also apply in maritime areas adjacent to the outer limit of the territorial sea over which the Contracting Party concerned may, in accordance with its legislation and international law, exercise sovereignty, sovereign rights or jurisdiction.

3. To article 3:

(a) The following in particular, although not exclusively, shall be deemed "activities" within the meaning of article 3, paragraph 2: the management, utilization, use and enjoyment of a capital investment. The following in particular, although not exclusively, shall be deemed treatment "less favourable" within the meaning of article 3: less favourable treatment in the case of restrictions on the purchase of raw materials and other inputs, energy and fuel, as well as on all kinds of production and operation; less favourable treatment in the case of obstacles to the sale of products within and outside the country; and any measure with similar effects. Measures taken for reasons of public security and order, public health or morality shall not be deemed "less favourable" treatment within the meaning of article 3;

(b) The provisions of article 3 shall not require a Contracting Party to extend to individuals and companies resident in the territory of the other Contracting Party the tax privileges, exemptions and relief accorded under its tax laws only to individuals and companies resident in its territory;

(c) The Contracting Parties shall, within the framework of their domestic legislation, give favourable consideration to applications for entry and stay by persons of one Contracting Party who, in connection with a capital investment, wish to enter the territory of the other Contracting Party; the same rule shall apply to wage-earners of one Contracting Party who, in connection with a capital investment, wish to enter and stay in the territory of the other Contracting Party to carry on their activity as wage-earners. Applications for work permits shall also be given favourable consideration.

4. *To article 4:*

A right to compensation shall also exist when State measures are taken against the company in which the investment was made and the company's economic situation is severely impaired as a result.

5. *To article 5:*

A transfer shall be deemed to have been made "without delay" within the meaning of article 5, paragraph 2, if it is effected within the period normally required for the completion of transfer formalities. Such period shall commence with the submission of the relevant request and may in no circumstances exceed two months.

6. In respect of the transport of goods and persons in connection with a capital investment, each Contracting Party shall neither exclude nor hinder the transport companies of the other Contracting Party and shall, where necessary, issue transport permits. Transport of the following are included:

(a) Goods intended directly for a capital investment within the meaning of the Treaty or acquired in the territory of one of the Contracting Parties or a third State by a company or by order of a company in which capital has been invested within the meaning of the Treaty;

(b) Persons traveling in connection with a capital investment.

Done at Quito on 21 March 1996, in two copies, each in the Spanish and German languages, both texts being equally authentic.

For the Republic of Ecuador:

DR. GALO LEORO FRANCO

For the Federal Republic of Germany:

DR. WERNER PIECK

[TRANSLATION - TRADUCTION]

TRAITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR ET LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA PROMOTION ET À LA
PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS DU CAPITAL

La République de l'Équateur et la République fédérale d'Allemagne,
Désireuses d'intensifier la coopération économique entre les deux États,
Entendant créer des conditions favorables aux investissements de capital pour des nationaux et des sociétés d'un État sur le territoire de l'autre État,

Reconnaissant que la promotion et la protection de ces investissements de capital par voie de traité sont de nature à stimuler l'initiative économique privée et à accroître le bien-être des deux peuples,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Traité :

1. Le terme "investissements de capital" désigne tous types d'avoirs; en particulier :
 - a) La propriété des biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, gages et nantissements;
 - b) Les actions, droits de participation dans des sociétés et autres formes de participation dans des sociétés;
 - c) Les créances portant sur des sommes d'argent servant à créer une valeur économique ou sur toute prestation à valeur économique;
 - d) Les droits de la propriété intellectuelle, comme les droits d'auteur, les brevets, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels et commerciaux, les marques, les noms commerciaux, les secrets industriels et commerciaux, les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle;
 - e) Les concessions accordées dans le cadre du droit public relatif aux activités commerciales et industrielles, y compris les concessions de prospection et d'exploitation des ressources naturelles,étant entendu que les modifications des modalités d'investissement des avoirs n'affectent pas leur statut d'investissements de capital.
2. Le terme "revenus" désigne les sommes rapportées par un investissement de capital pendant une période donnée, en particulier les participations aux bénéfices, dividendes, intérêts et droits de licence.
3. Le terme "nationaux" désigne :
 - a) En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: les Allemands aux sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne;

b) En ce qui concerne la République de l'Equateur, les Equatoriens au sens de la Constitution de l'Equateur.

4. Le terme "sociétés" désigne :

a) En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne :

Toutes les personnes morales ainsi que toutes les sociétés commerciales et autres sociétés ou associations dotées ou non de la personnalité juridique dont le siège est situé sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, que leur activité ait un but lucratif ou non.

b) En ce qui concerne la République de l'Equateur :

Toutes les personnes morales constituées conformément aux lois et règlements équatoriens et domiciliées sur le territoire de cette Partie contractante, que leur activité ait un but lucratif ou non.

Article 2. Promotion des investissements

1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements de capital sur son territoire par des nationaux ou des sociétés de l'autre Partie contractante et les admet conformément à ses lois et réglementations. En tout état de cause, elle traite ces investissements de manière juste et équitable.

2. Aucune des Parties contractantes ne fait obstacle sur son territoire, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, à l'administration, à l'utilisation, à l'usage ou à la jouissance des investissements de capital de nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante.

Article 3. Traitement des investissements

1. Aucune des Parties contractantes ne soumet sur son territoire les investissements de capital des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante ou les investissements sous leur contrôle effectif à un traitement moins favorable que celui accordé aux investissements de capital de ses propres nationaux et sociétés ou de ceux d'États tiers.

2. Aucune des Parties contractantes ne soumet sur son territoire les nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, s'agissant de leurs activités liées aux investissements de capital, à un traitement moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux et sociétés ou à ceux d'États tiers.

3. Ce traitement ne couvre pas les avantages ou privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'États tiers en raison de leur appartenance ou association à une union douanière ou économique, à un marché commun ou à une zone de libre-échange.

4. Le traitement prévu dans le présent article ne s'applique pas aux avantages que l'une des Parties contractantes accorde aux nationaux et sociétés d'États tiers en conséquence d'un accord visant à éviter la double imposition ou autre accord fiscal.

*Article 4. Protection des investissements et indemnité
en cas d'expropriation*

1. Les investissements de capital des nationaux ou sociétés de chacune des Parties contractantes bénéficient d'une pleine protection et d'une pleine sécurité juridique sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2. Les investissements de capital de nationaux ou sociétés d'une Partie contractante ne peuvent pas, sur le territoire de l'autre Partie contractante, être expropriés ou nationalisés, ou faire l'objet d'autres mesures dont les effets équivaldraient à une expropriation ou à une nationalisation, sauf pour cause d'utilité publique, et dans ce cas avec indemnisation. L'indemnisation doit correspondre à la valeur de l'investissement exproprié immédiatement avant l'expropriation effective ou imminente, la nationalisation ou la mesure équivalente. L'indemnité doit être versée sans retard et porte intérêts jusqu'à la date du paiement au taux d'intérêt commercial usuel; elle doit être effectivement réalisable et librement transférable en monnaie convertible. Au plus tard au moment de l'expropriation, nationalisation ou mesure comparable des mesures seront prises afin de fixer le montant et de verser l'indemnisation. La légalité de l'expropriation, de la nationalisation ou autre mesure équivalente, ainsi que le montant de l'indemnisation, doivent pouvoir être revus dans le cadre de procédures devant les tribunaux compétents.

3. Les nationaux ou sociétés d'une Partie contractante dont les investissements de capital subissent des pertes à cause d'une guerre ou autre conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence nationale ou d'une insurrection sur le territoire de l'autre Partie contractante ne sont pas traités par celle-ci moins favorablement que ses propres nationaux ou sociétés ou ceux d'États tiers quant à la restitution, à la pension, à l'indemnisation ou autre forme de paiement. Ces paiements seront librement transférables.

4. Les nationaux ou sociétés d'une Partie contractante bénéficieront sur le territoire de l'autre Partie contractante du traitement de la nation la plus favorisée pour ce qui est des questions visées dans le présent Article.

Article 5. Libre transfert des paiements

1. Chaque Partie contractante garantit aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante le libre transfert des paiements liés à un investissement de capital, s'agissant en particulier :

- a) Du capital et des fonds additionnels nécessaires au maintien ou à l'augmentation de l'investissement;
- b) Des revenus;
- c) De l'amortissement des prêts;
- d) Du produit de la vente ou liquidation totale ou partielle de l'investissement de capital;
- e) Des indemnités visées à l'Article 4.

2. Les transferts effectués conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'Article 4, au paragraphe 1 de l'Article 5 et à l'Article 6 se font sans retard et sur la base du taux de change en vigueur dans chaque cas.

3. Ce taux correspond au taux croisé résultant des taux de change qu'appliquerait le Fonds monétaire international si, à la date du paiement, les monnaies des pays intéressés étaient converties en droits de tirage spécial.

Article 6. Subrogation

Si l'une des Parties contractantes fait des paiements au bénéfice de ses nationaux ou de ses sociétés en vertu d'une garantie accordée pour un investissement de capital effectué sur le territoire de l'autre Partie contractante, celle-ci, sans préjudice des droits conférés à la première Partie contractante par l'Article 9 du présent Traité, reconnaît la cession par effet de la loi ou par convention juridique de tous les droits ou créances de ces nationaux ou sociétés à la première Partie contractante. En outre, l'autre Partie contractante reconnaît la subrogation de la première Partie contractante dans tous les droits transférés qu'elle sera autorisée à exercer dans la même mesure que le précédent titulaire. S'agissant de transfert des paiements au titre des droits ainsi cédés, les paragraphes 2 et 3 de l'Article 4 et l'Article 5 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 7. Autres réglementations

1. Si les dispositions légales de l'une ou l'autre Partie contractante ou des obligations résultant du droit international et non envisagées dans le présent Traité actuelles ou futures, entre les Parties contractantes, conduisent à une réglementation générale ou spéciale imposant d'accorder aux investissements de capital des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Traité, cette réglementation prévaut sur le présent Traité pour autant qu'elle est plus favorable.

2. Chacune des Parties contractantes s'acquitte de tout autre engagement éventuellement contracté en rapport avec les investissements de capital de nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante sur son territoire.

Article 8. Protection des investissements précédents

Le présent Traité s'applique également aux investissements effectués par les nationaux ou sociétés d'une des Parties contractantes conformément aux lois et règlements de l'autre Partie contractante sur le territoire de cette dernière avant l'entrée en vigueur du Traité.

Article 9. Règlement des différends entre les Parties contractantes

1. Les différends éventuels entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Traité sont, dans la mesure du possible, réglés par les gouvernements des deux Parties contractantes par la voie diplomatique.

2. Tout différend ne pouvant être réglé de cette manière dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle une Partie au différend l'a soulevé est soumis à un tribunal arbitral à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes.

3. Le tribunal arbitral est constitué sur une base ad hoc : chaque Partie contractante nomme un membre du tribunal, et les deux membres ainsi nommés choisissent d'un commun accord comme président un national d'un État tiers qui est nommé par les gouvernements des deux Parties contractantes. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois et le président dans un délai de trois mois après que l'une des Parties contractantes a communiqué à l'autre son désir de soumettre le différend à un tribunal arbitral.

4. Si les délais spécifiés au paragraphe 3 ne sont pas observés et à défaut d'autre arrangement, chacune des Parties contractantes peut inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires.

Au cas où le Président serait un national de l'une des Parties contractantes ou s'il était empêché pour une autre raison de s'acquitter de cette fonction, il revient au Vice-Président de procéder aux nominations. Si ce dernier lui-même est un national de l'une des Parties contractantes ou s'il est empêché de remplir cette fonction, il revient au membre de la Cour venant immédiatement à la suite dans l'ordre hiérarchique et qui n'est pas un national de l'une des deux Parties contractantes de procéder aux nominations.

5. Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix, et ses décisions ont force exécutoire. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais découlant des activités de son arbitre, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais du président et les autres frais sont pris en charge à parts égales par les Parties contractantes. Toutefois, le tribunal arbitral peut attribuer à l'une des Parties contractantes un pourcentage plus élevé des frais. Pour le reste, le tribunal arbitral arrête sa propre procédure.

6. Si les deux Parties contractantes sont également parties à la Convention pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, en date du 18 mars 1965, il ne pourra pas, en vertu du paragraphe 1 de l'Article 27 de cette Convention, être recouru au tribunal arbitral susmentionné si un accord a été conclu entre un national ou société d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante en vertu de l'Article 25 de la Convention. La possibilité d'un tel recours n'est pas affectée au cas où une décision du tribunal arbitral établie par ladite Convention (Article 27) ne serait pas respectée ou dans le cas d'un transfert en vertu d'une disposition législative à la suite d'une transaction conforme à la loi en vertu de l'Article 6 du présent Traité.

*Article 10. Règlement des différends entre un investisseur
et la Partie contractante ayant reçu l'investissement*

1. Les différends entre une partie contractante et les nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante en ce qui concerne les dispositions du présent Traité seront, autant que possible, réglés à l'amiable.

2. Si un différend ne peut pas être réglé dans un délai de six mois à dater de la date à laquelle l'une des Parties au différend l'a soulevé, il sera soumis, à la demande de l'investisseur :

a) À un tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement était effectué;

b) À un tribunal arbitral dont la compétence a été acceptée par les Parties contractantes.

À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, les différends seront soumis à arbitrage en vertu de la Convention pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États en date du 18 mars 1965.

3. Dans le cas où l'investisseur a soumis le différend à un tribunal compétent de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, il ne pourra recourir par la suite à un tribunal arbitral que dans les cas ci-après :

a) Si le tribunal national compétent n'a pas statué sur les mérites de l'affaire dans les 18 mois; ou

b) Si le tribunal national compétent n'a pas suivi les dispositions du présent Traité dans sa décision.

4. La décision du tribunal arbitral en vertu du paragraphe 2 (b) aura force exécutoire et sera appliquée conformément à la législation nationale. La décision du tribunal arbitral prise conformément à la Convention sur le Règlement des différends en matière d'investissements entre États et nationaux d'autres États en date du 18 mars 1965 ne peut pas faire l'objet d'un appel ou d'actes juridiques autres que ceux prévus dans ladite Convention.

5. La Partie contractante prenant part au différend ne pourra pas, pendant la procédure d'arbitrage ou l'application d'une décision arbitrale invoquer le fait que le national ou la société de l'autre Partie contractante a reçu une indemnisation au titre d'assurance pour tout ou partie de la perte ou du dommage.

Article 11. Relations diplomatiques ou consulaires

Le présent Traité s'applique qu'il existe ou non des relations diplomatiques ou consulaires entre les Parties contractantes.

Article 12. Entrée en vigueur et durée

1. Le présent Traité sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés dans les meilleurs délais à Bonn.

2. Le présent Traité entrera en vigueur un mois après la date à laquelle il aura été procédé à l'échange des instruments de ratification. La durée de sa validité sera de 10 ans et il sera ensuite indéfiniment prorogé, sauf notification écrite adressée par une Partie contractante à l'autre Partie contractante de son intention d'y mettre fin, 12 mois avant la date d'expiration. Au bout de 10 ans, le Traité pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 12 mois.

3. Pour ce qui est des investissements de capital effectués avant la date d'expiration du présent Traité, les dispositions des Articles 1 à 11 resteront applicables pendant 15 ans à partir de la date d'expiration de la validité du Traité.

4. Au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité, le Traité entre la République de l'Equateur et la République fédérale d'Allemagne relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements de capital en date du 28 juin 1965 cessera d'être applicable.

Fait à Quito le 21 mars 1996, en deux exemplaires, chacun dans les langues espagnole et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour la République de l'Equateur :

GALO LEORO F.

Pour la République fédérale d'Allemagne :

WERNER PIECK

PROTOCOLE

Au moment de la signature du Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République de l'Equateur relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements de capital, les plénipotentiaires soussignés ont également adopté les dispositions supplémentaires ci-après, considérées comme faisant partie intégrante du Traité :

1. Ad Article premier

a) Le revenu découlant d'un investissement de capital et, dans le cas de son réinvestissement, le revenu en découlant bénéficieront de la même protection que l'investissement initial;

b) Sans préjudice des autres modes de détermination de la nationalité, toute personne détentrice d'un passeport national délivré par les autorités compétentes d'une Partie contractante sera notamment considérée national de ladite Partie contractante.

2. Ad Article 2

a) Les investissements de capital qui, conformément aux dispositions juridiques d'une des Parties contractantes ont été effectués sur le territoire de ladite Partie contractante par des nationaux ou des sociétés de l'autre Partie contractante bénéficient de la pleine protection du Traité;

b) Le Traité s'applique également aux zones maritimes adjacentes aux limites extérieures des eaux territoriales sur lesquelles la Partie contractante intéressée peut, conformément à sa législation et au droit international, exercer sa souveraineté, ses droits de souveraineté ou sa juridiction.

3. Ad Article 3

a) Par "activités" au sens du paragraphe 2 de l'Article 3, sont notamment mais non limitativement entendues l'administration, l'usage et la jouissance d'un investissement de capital. Sera notamment, mais non limitativement considéré un traitement « moins favorable » au sens de l'Article 3 : une mesure moins favorable affectant l'acquisition de matières premières et autres facteurs de production, d'énergie ou de combustibles, ainsi que les moyens de production ou d'exploitation, un traitement non moins favorable dans le cas d'obstacles à la vente de produits dans le pays même ou à l'étranger, et toute mesure ayant des effets semblables. Ne seront pas considérées comme « traitements moins favorables » les mesures prises pour des motifs de sécurité, d'ordre public, de santé publique ou de moralité au sens de l'Article 3;

b) Les dispositions de l'Article 3 ne font pas obligation à une Partie contractante d'accorder aux personnes physiques et aux sociétés résidant sur le territoire de l'autre Partie contractante les avantages, exonérations et abattement fiscaux qui, en vertu de son droit fiscal, sont accordés aux seules personnes physiques et sociétés résidant sur son territoire;

c) Les Parties contractantes, dans le cadre de leur législation interne, instruiront avec bienveillance les demandes de permis d'entrée et de séjour sur leur territoire présentées par des ressortissants de l'une des Parties contractantes qui, en rapport avec un investissement de capital, souhaitent entrer sur le territoire de l'autre Partie contractante; il en sera de même pour les salariés d'une Partie contractante qui, en rapport avec un investissement de capital,

souhaitent entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y exercer leur activité salariée. De même, les demandes de permis de travail seront instruites avec bienveillance.

4. Ad Article 4

Il y aura également droit à indemnisation si l'État prend des mesures à l'encontre de la société dans laquelle l'investissement a été effectué et si ces mesures entraînent pour la société un préjudice économique grave.

5. Ad Article 5

Le transfert est censé avoir été effectué « sans retard » au sens du paragraphe 2 de l'Article 5 quand il a lieu pendant la période normalement requise pour accomplir les formalités de transfert. Ladite période courra à partir du moment de la présentation de la demande pertinente et ne pourra jamais dépasser deux mois.

6. En ce qui concerne le transport de biens et de personnes en rapport avec un investissement de capital, chaque Partie contractante ne pourra ni exclure ni entraver les activités des entreprises de transport de l'autre Partie contractante et devra, le cas échéant, délivrer les permis nécessaires, pour les articles ci-après :

a) Les biens destinés directement à un investissement de capital au sens du Traité ou acquis sur le territoire de l'une des Parties contractantes ou d'un État tiers pour une société ou sur commande d'une société dans laquelle le capital a été investi au sens du Traité;

b) Les personnes en déplacement en relation avec un investissement de capital.

Fait à Quito le 21 mars 1996, en deux exemplaires, chacun en langues espagnole et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour la République de l'Equateur :

GALO LEORO F.

Pour la République fédérale d'Allemagne :

WERNER PIECK